

1. Libertad económica y competitividad fiscal



Julio Pomés
Presidente

Si examinan los distintos índices que miden la libertad en el mundo (índices de *CATO*, *Heritage* y *Fraser*), apreciarán que existe una correlación positiva entre el valor del índice y el PIB per cápita. La conclusión es obvia: la libertad nos hace ricos y el abuso intervencionista del Estado nos empobrece.

En unos días Civismo presentará en Madrid y en varias capitales autonómicas *Libertad Económica en España 2013* que, mediante una metodología de validez contrastada que utiliza 12 indicadores, clasifica el grado de libertad de cada región española. Su principal utilidad reside en que constituye una fuente de ideas para inspirar políticas públicas a los gobernantes que prefieran la prosperidad al populismo. Una de las variables más influyentes en la libertad económica es la política fiscal. La comparativa de tributos

en las CCAA muestra grandes diferencias. Los políticos ilusos creen que subiendo los impuestos mejorarán su región, pero consiguen lo contrario: menos ingresos al deslocalizarse empresas a CCAA con una fiscalidad más atractiva, reducir el consumo y la inversión. La consecuencia es que esas regiones pierden competitividad fiscal ante el resto de España y la UE. Resulta patético que la voracidad de algunos gobiernos autonómicos les lleve a imponer tributos cuyos costes de gestión superan la recaudación. La competitividad fiscal entre regiones es conveniente para obligar a sus gobernantes a ser más eficientes. Ahora bien, el ciudadano no se conforma con recibir servicios, sino que además reclama rentabilidad a lo que paga al Fisco. No obstante, cuando falta información y transparencia, puede ocurrir que mayores impuestos se traduzcan en gastos tan populistas como innecesarios. Imponer una homogeneidad fiscal en las regiones españolas y en las europeas llevaría a perjudicar la competitividad de nuestras empresas y, en definitiva, a hacernos más pobres.